

Lula: entre los intereses del pueblo y los del capital

Lula: “Soy el presidente de la República, no soy Dios”

Lula cumple ya año y medio en la presidencia de Brasil y como a muchos otros presidentes, latinoamericanos o no, a medida que sus mandatos avanzan, hay que hacerles la pregunta de a quiénes están sirviendo con sus políticas. Hay respuestas para todos los gustos pero quizá haya una que es especialmente resbaladiza en los tiempos que corren, es aquella de que para servir al pueblo hay que tener primero contento al gran capital. ¿Es esa la única política realista hoy en día? ¿por qué tantos mandatarios que llegan al poder cargados de promesas populistas e incluso transformadoras siguen derroteros parecidos?

La llegada al poder de Lula supuso una esperanza nueva a nivel continental para muchas gentes de las clases más humildes (1). Por fin, un hijo del pueblo llano y no de la universidad se alzaba como presidente, apreciado por los movimientos sociales, por la parte de la Iglesia católica más comprometida con los pobres, con un pasado de lucha sindical y política cercana a las necesidades de los más desfavorecidos de su país. Se abrían esperanzas nuevas no sólo entre los 52 millones de brasileños que lo votaron sino entre las clases populares de otros países latinoamericanos más modestos.

El tiempo va trascurriendo y en la respuesta a nuestra pregunta inicial se ve cada vez una brecha más grande entre el campo de las intenciones y el de los hechos. Los condicionantes económicos internacionales, la Deuda Externa, la falta de sociedades civiles estructuradas, el caciquismo instalado durante siglos, las desigualdades descomunales existentes, la cultura de clientelismo político, la falta de experiencia de gestión, etc, etc; son

elementos que no se puedan menospreciar a la hora de transformar un país como Brasil, como tampoco son elementos que se cambian de un día para otro y esto hay que tenerlo muy en cuenta para no ser injustos en el análisis.

Lula recibió hace año y medio un país con una Deuda externa que se come el 58% del PIB con un régimen de vencimiento a corto plazo altísimo; con una moneda, el real, que acumulaba una devaluación de casi el 40%; con 57 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, de los cuales 33 millones están en situación de malnutrición; un país que tiene entre otros records el de ser el país del mundo con peor índice de distribución de la renta, etc, etc.

No se trata de ser cagaprisas, ni soñadores idealistas; todo requiere su tiempo. Mas siendo esto verdad, de vez en cuando, hay que levantar la mirada para ver si el camino elegido se acerca o se aleja del fin perseguido, e incluso para ver si el fin perseguido sigue siendo el mismo.

A estas alturas nadie se atreve a decir de Lula que es un revolucionario, muchos lo tildan de socialdemócrata y no pocos de neoliberal. Sin embargo, para los que no somos muy amantes de las etiquetas y preferimos los hechos a continuación recojo algunas de las cosas más relevantes que a mi parecer han ocurrido aún a sabiendas de que muchas otras quedan en el tintero.

Política nacional

Para situarse ante los distintos aspectos que configurar el discurrir de la política nacional llevada a cabo por el Gobierno de Lula hay que tener presentes dos componentes: uno interno y otro marcado por los resultados electorales.

(1) *Cultura para la Esperanza* nº 51. “Brasil: la política ¿el arte de lo posible?”

En el orden interno hay que hacer constar que el PT (Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula) ha seguido a lo largo de los últimos 10 años un distanciamiento progresivo de lo que fueron sus orígenes marcados por una vinculación directa con los movimientos sociales y sindicales. La puesta en marcha de la maquinaria electoral y la vinculación con las estructuras institucionales han hecho que la base popular tenga cada vez menos peso en el PT. Baste decir que en el último congreso nacional (Recife 2001) más del 75% de los delegados eran profesionales de clase media, y funcionarios públicos, mientras que el otro 25% quedaba para sindicalistas y líderes de movimientos sociales, algo impensable a comienzos de los 90.

Ese distanciamiento va acompañado por procesos de división interna, procesos que se han acentuado después del ascenso al poder de Lula. Decisiones como la de nombrar como Ministro de Finanzas a Antonio Palocci, ex alcalde del PT en Ribeirao Pret, estado de Sao Paulo, donde privatizó el agua, las compañías telefónicas y se alió con los barones del azúcar han dolido, pero quizá lo que más ha dolido ha sido la expulsión de 1 senadora y 3 diputados del PT por sus críticas ante la línea que había tomado el partido en general y en el campo de la Reforma de pensiones en particular, al saltarse la disciplina de voto impuesta por el partido en la votación para sacar adelante esa reforma. Esa expulsión de los críticos a la línea oficialista del PT fue muy contestada, de hecho hubo un apoyo internacional de más de 1000 intelectuales de izquierdas pidiendo que no se produjera, pero el Gobierno fue implacable.

Mas si internamente las cosas no son precisamente una balsa de aceite y de hecho hubo una reestructuración de gobierno a principios de año en la que Lula redujo de 21 a 19 el número de ministros procedentes del PT, hay otro elemento que se añade a éste y que dificulta la implantación de cambios significativos en Brasil, es el hecho de la debilidad parlamentaria del PT.

Una cosa es el apoyo que el PT obtuvo en las elecciones legislativas (91 de los 513 escaños en el congreso y 14 de los 81 en el Senado) y otra muy distinta el apoyo que obtuvo Lula en las elecciones presidenciales (61% de los votos). Lula venció en 26 de los 27 estados y el PT sólo tiene 3 gobernadores. Actualmente el PT gobierna en coalición con otros 8 partidos, 3 de los cuales son abiertamente de derechas. Creer que sin un apoyo

suficiente en las Cámaras se pueden llevar a cabo reformas de fuerte calado es un poco ilusorio. En esas circunstancias lo que prima es el acuerdo de mínimos y no las políticas de máximos.

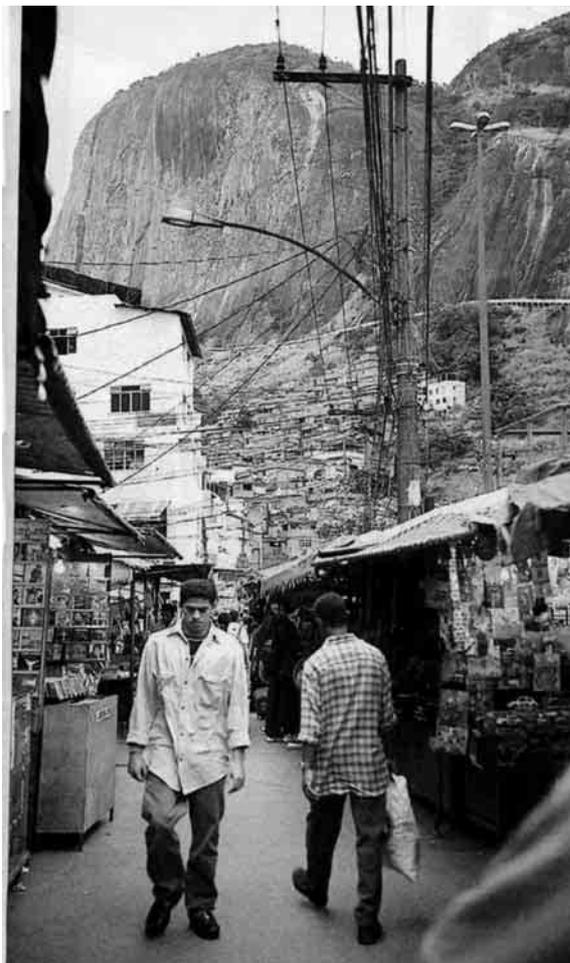
Sin ir más lejos la semana pasada quedó de manifiesto la debilidad del Gobierno en las Cámaras, en este caso el Senado aprobó una propuesta presentada por la oposición según la cual el salario mínimo se aumentaba de casi 80 a 88 \$. Lula siguiendo el consejo de su equipo económico había propuesto un incremento a tan sólo 83\$ argumentando que un crecimiento mayor pondría en peligro la política de control de gastos que lleva adelante su Administración.

Esta derrota del gobierno tiene un triple sabor amargo. Ha puesto de manifiesto ante los mercados financieros el poder real con que cuenta Lula en las Cámaras. El Gobierno ha visto cómo varios senadores oficialistas respaldaron con su voto la propuesta de la oposición. Y, por último, está la decepción creada entre buena parte del electorado que les apoyó. Lula tiene todavía la opción de vetar esa decisión pero seguro que tendrá muy presente que el salario mínimo lo reciben cerca de un tercio de los trabajadores brasileños y el 63% de aquellos que reciben pensiones y ayudas del Estado. Además, el próximo mes de octubre se celebrarán elecciones municipales en Brasil.

Otra clave a tener presente para comprender la situación actual en Brasil, dejando al margen cuestiones como la aparición de los primeros casos puntuales de corrupción en cargos de responsabilidad del Gobierno como el de Waldomiro Diniz, subsecretario de la Casa Civil, y asesor del "superministro" José Dirceu, es la del desigual reparto de poderes que Lula ha hecho en el Gobierno. Los ministerios claves desde un punto de vista económico han quedado en manos conservadoras como veremos más adelante y ¿cuáles han quedado en manos de gente más de izquierdas? Los de carácter más social como el de Medio Ambiente, Educación, Deporte, Desarrollo Agrícola o el Ministerio para las Ciudades. Ministerios que casi en su totalidad vieron recortados sus presupuestos por el Ministerio de Economía. El reparto de poder es desigual y en este caso desfavorable para los que teóricamente son de casa.

Política internacional

Respecto a la política internacional hay que decir que al frente de la cancillería brasileña esta Celso Amorim quien fuera ex embajador en



EE.UU. con Cardoso. Sin embargo, esto no ha supuesto un freno en la apuesta del gobierno de Lula por potenciar las relaciones Sur-Sur.

En la era de la globalización pensar en soluciones individuales no funciona ni entre los fuertes, de modo que la política más realista para cambiar la situación actual exigía trabajar por buscar una coalición con los países más cercanos en intereses y situación económica. Siendo esto así, la política exterior de Lula ha estado marcada por dar prioridad a la defensa de la soberanía nacional y al establecimiento de alianzas entre países del Tercer Mundo con la finalidad de defender sus derechos ante los países ricos y sus privilegios.

En esta línea cabe destacar la alianza del G3 en junio del 2003 con China y Sudáfrica, para después dar el paso del G20, un alianza que sería clave para plantar cara a los privilegios comerciales de los países enriquecidos en la cumbre de la OMC en Cancún. Esta alianza consiguió abortar los Acuerdos de Doha e impidió que los países

desarrollados se pudieran salir con la suya a la hora de mantener en pie sus subsidios agrícolas.

También cabe destacar los esfuerzos de Lula por reforzar el Mercosur (Mercado Común Suramericano) y la CAN (Comunidad Andina de Naciones) no sólo como instrumentos de intercambio comercial sino también cultural y político. Además sin en este embrión de integración regional se hace mucho más difícil la negociación del ALCA con EE.UU.

En relación con este último punto la postura de Brasil no ha sido contundente, en la reunión ministerial de Miami dieron un balón de oxígeno a las pretensiones estadounidenses y aceptaron el entrar por una línea de negociaciones rebajando las exigencias norteamericanas que eran claramente colonialistas y que a pesar de todo lo siguen siendo. A cambio, se planteó lo que se ha llamado un ALCA light o pragmático, que en el fondo no es más que un reflejo del hecho de que EE.UU. es el destinatario de la mayor parte de las exportaciones brasileñas y que los grandes empresarios locales no están dispuestos a poner en peligro esta realidad.

Economía

Lula presentó un programa económico de corte keynesiano, apostando por el mercado interno y el capital productivo, buscando potenciar la industria local a la vez que reducir las importaciones y crear así más empleos.

Tras esta estrategia, no compatible con un enfrentamiento abierto con el empresariado local, se justificaban toda una serie de nombramientos difíciles de aceptar para la izquierda tradicional: uno de los empresarios textiles más poderosos del país accedía al puesto de Vicepresidente del país; el presidente de Sadia, el principal monopolio exportador de la industria alimentaria brasileña tomaba las riendas de la cartera de Industria y Comercio Exterior; y el presidente de la Asociación Brasileña de Agrobusiness que agrupa a las 60 principales empresas del sector en Brasil, entre ellas Monsanto (lo cual explica la llamativa tolerancia del Gobierno hacia el tema de los cultivos transgénicos), accedía al Ministerio de Agricultura y Desarrollo.

Sin embargo, el peor trago y más difícil de explicar era la elección del equipo económico. Situar al frente del Banco Central a Enrique Miralles, ex presidente del banco de inversiones norteamericano Fleet Boston Global Bank que sigue la

ortodoxia neoliberal, y de Ministro de Finanzas al ya mencionado Antonio Palocci ponía de manifiesto que Lula no quería romper con la ortodoxia económica al uso. Su keynesianismo lo quería montar sobre un sustrato neoliberal, tal vez, condicionado por el miedo a la pérdida de confianza de los mercados ante el posible impago de esa gigantesca losa que es la Deuda externa brasileña.

Describir la dinámica económica de fondo que se respira en Brasil no es fácil pero aún a riesgo de simplificar mucho apuntaría algunas líneas sobre las que situar las cifras y algunos comentarios:

- El no atender de forma adecuada las exigencias de la Deuda puede llevar a una situación en la que el gobierno no cumpla sus "compromisos" y esto generaría una situación en la que los inversores se desharían de los títulos de deuda brasileños, se acentuaría la salida capitales y se incrementaría la tasa de riesgo del país (esto último significa pagar más intereses porque la tasa de riesgo fija el interés del préstamo que se te aplica, los considerados poco solventes pagan intereses más altos).

- Para que lo anterior no ocurra hay que retener fondos para cumplir ante los mercados (controlar el gasto social), aparecer como solventes en el pago de los compromisos y, como no, contener las inflación. La fórmula que se ha seguido para esto ha sido la de endurecer la política monetaria del Banco Central brasileño.

- El Banco Central para retener los capitales de los inversores lo que hace es subir las tasas de interés, con esta medida el inversor no se llevará su dinero porque le renta mucho y, al tiempo, con esa medida se controla la inflación. Pero ocurre que con estas medidas se viste a un santo y se desviste a otro porque al subir las tasa de interés también se encarece la Deuda pública y, por otra parte, se reduce el nivel de actividad económica del país porque cualquier préstamo que necesite una empresa para crecer o salir a flote es muy caro.

Con este cuadro de fondo la política económica de Lula se mueve en un equilibrio inestable: si cumple con los mercados financieros (FMI) ha de recudir gastos sociales y ralentizar el crecimiento económico; si cumple sus programas sociales (sindicatos y movimientos sociales) y su promesa de un crecimiento espectacular (burguesía y oligarquía brasileña) pone en riesgo sus pagos con los mercados financieros.

Mantener el equilibrio con tantos intereses, necesidades y sujetos distintos, y no sólo distintos sino que en buena medida además de distintos son contrapuestos, no es posible. Pero dejemos que los datos hablen y que cada cual saque sus conclusiones:

- El compromiso que Lula, junto al resto de candidatos de todos los partidos políticos de peso en Brasil firmó antes de que se celebraran las elecciones generales para conseguir un préstamo del FMI de 30.000 millones de \$ en un momento económico muy complicado, ha sido respetado escrupulosamente. El FMI para asegurar el pago de la Deuda fijó un superávit fiscal (ingresos menos gastos del Estado dejando a parte los pagos por el tema de la Deuda) de un 3,75% del PIB, pues bien, el Gobierno no sólo lo aceptó sino que además se fijo un techo más alto el 4,25% y lo ha cumplido.

- Ha mantenido una de las tasas de interés más elevadas del mundo aunque han ido bajado bajando progresivamente pero todavía están en torno al 16,5%.

- La inflación se ha controlado y hoy es de un 6% anual; el real se ha apreciado y la tasa de riesgo ha pasado de 2800 a 700 con lo que los préstamos internacionales son más baratos.

- El crecimiento económico del 2003 se cerró con un aumento del 0,4% del PIB, aunque si se tiene en cuenta que la población en Brasil crece a un ritmo de un 1,4% se puede decir que el producto bruto per cápita ha decrecido. Todo ello a pesar de que las exportaciones crecieron un 21% .

- La promesa de crear 10 millones de puestos de trabajo en esta legislatura parece cada vez más lejana ya que crece el desempleo y en abril ya había sobrepasado el 12%.

- A pesar del esfuerzo realizado por pagar Deuda externa, calculada en unos 262.000 millones de \$, al fijarse un superávit del 4,25% las cosas no parecen avanzar mucho. En el 2003 Brasil pagó 35.900 millones de \$ en concepto de amortización de deuda y en 2004 tendrá que pagar por el mismo concepto 39.000 millones de \$.

Reformas

En el programa electoral el PT se contemplaban cinco grandes reformas: la tributaria, la de la seguridad social, la de legislación laboral, la agraria y la política. Las dos primeras de contenido

fuertemente económico, y destinadas a equilibrar las cuentas públicas fueron aprobadas en 2003.

Según el Gobierno, el deficitario sistema de pensiones le costó al Estado en el año 2002 más de 19.000 millones de \$ (casi un 5% de su PIB). El objetivo de la reforma era disminuir este déficit y para ello se mermaron las condiciones de las pensiones recibidas por los funcionarios al considerarlas como privilegiadas respecto al resto de trabajadores. De este modo los futuros funcionarios jubilados que ganen más de 420\$ mensuales pasarán a pagar impuestos; se les eleva la edad de jubilación, se definen montos máximos para las pensiones y se abren las puertas al enorme negocio de los fondos de pensiones para aquellos que deseen recibir un beneficio superior al establecido.

Ni que decir tiene que las reacciones en la calle y las huelgas contra el Gobierno de Lula no faltaron entre el colectivo funcional que contaba con el apoyo de unos sindicatos que veían cómo la Reforma no contemplaba la reivindicación histórica del aumento de las pensiones más bajas.

Respecto a la Reforma tributaria decir que cada brasileño asalariado paga de media el 27,5% de sus ingresos en impuestos. Y que los empresarios, por su parte, se quejan de que la carga impositiva es muy elevada y advierten que ésta imposibilita nuevas inversiones.

La compleja Reforma impositiva se ha tenido que dividir en 3 fases. En la primera fase se ha aprobado prorrogar y aumentar el cobro de algunos impuestos (a las transacciones financieras, por ejemplo), liberar al Estado para disponer libremente de hasta 20% de la recaudación de impuestos y bajar los impuestos a las exportaciones y a la producción industrial. Pero la primera intención del Gobierno que era la de simplificar el sistema tributario brasileño y poner fin al instrumento de incentivo tributario tan utilizado por los Estados, vulgarmente llamado *guerra fiscal* tuvo que posponerse ante las necesidades financieras de la administraciones nacional y estatales y la presión de los legisladores de la oposición no ligados a los gobernadores, ya que éstos últimos fueron un apoyo importante para Lula en esta reforma.

Respecto de las otras 3 reformas pendientes se teme que las cosas vayan más despacio por falta de consenso y de recursos.

Social

En lo social hay que decir que programas no faltan, lo que faltan son recursos. El esfuerzo pre-

supuestario encaminado al pago de Deuda ha mermado las inversiones sociales. Nadie puede poner en duda la sensibilidad de Lula hacia la cuestión social pero parece que el frío razonamiento contable se impone al sentimiento, al menos en esta primera etapa que se supone de ajuste para cuadrar cuentas a la espera de una etapa posterior en la que poder empezar a desarrollar lo prometido.

Todos recordamos a Lula en Davos pidiendo a los ricos de este mundo su compromiso para acabar con la pobreza a través de un impuesto al capital especulativo dedicado a erradicar el hambre. Pero también sabemos que si la situación actual no pone en peligro los intereses de los poderosos no son éstos los que van a dar el primer paso para que la situación que les privilegia cambie. Esta dinámica no se rompe sólo con palabras y así se lo van a exigir los distintos agentes sociales al Gobierno de Lula.

En general se puede decir que las relaciones del Gobierno de Lula con sus aliados sociales no se han roto después este año y medio pero sí que se han tensado.

El movimiento sindical recuerda cómo el PT se comprometía en su programa de gobierno a crear 10 millones de empleos en cuatro años, a doblar el valor del salario mínimo en el mismo período y que para todo ello contaba con crecer a un ritmo del 5%. Pero todo esto está lejos de la realidad como ya hemos visto anteriormente, el paro crece, la subida del salario mínimo propuesta por el PT era insignificante y el crecimiento económico en 2003 ha sido casi nulo. Sin embargo, esto no ha sido el hecho que más ha tensado las relaciones gobierno-sindicatos, ha sido la Reforma del sistema de pensiones. No faltaron las críticas, las huelgas multitudinarias y hasta hechos anecdóticos pero significativos como el ocurrido en el último Congreso sindical de la CUT (Central Única de los Trabajadores de la que Lula fue líder histórico) donde por primera vez el presidente brasileño fue abucheado.

Por otra parte, la tregua del MST (Movimiento Sin Tierra) al Gobierno ya acabó. De la espera se ha pasado a la presión mediante la ocupación de tierras ante la falta de un compromiso efectivo del Gobierno para poner en marcha la Reforma Agraria. Una Reforma soñada por 4 millones de familias brasileñas que esperan ser asentadas y tener un trabajo digno.

Entre los meses de marzo y abril el MST protagonizó 135 ocupaciones de haciendas, con la participación de 33.411 familias en 20 de los 26 estados brasileños. Ocupaciones de las que inicialmente se podría pensar que contarían con menos oposición por parte de los grandes terratenientes al estar el PT en el Gobierno, pero la realidad ha sido otra. Se ha incrementado la existencia de bandas armadas para disuadir a los activistas y el nivel de violencia ha aumentado.

La Reforma Agraria supone para el Gobierno afrontar uno de los retos históricos de Brasil. De momento se ha comprometido a asentar 400.000 familias durante esta legislatura y a 115.000 familias en 2004, compromiso que Miguel Rossetto, Ministro de Desarrollo Agrario sostiene que se cumplirá, aunque mucho se han de acelerar las cosas ya que el mismo ministro reconoció que en el 2003 sólo asentaron 37.000 familias cuando el promedio anual con Cardoso era de 80.000 familias.

El problema de la tierra en Brasil es tan injusto que no puede esperar, pero al mismo tiempo tiene una complejidad que no es fácil de gestionar cuando uno tiene las fuerzas que tiene en las Cámaras como vimos anteriormente. Para que el lector tome un poco más de conciencia de qué hablamos le dejo unos datos:

- Cerca de 26.000 propietarios concentran en sus manos el 46 % de todas las tierras de Brasil.

- Casi un cuarto del territorio nacional (200 millones de hectáreas equivalentes a la superficie de México) no tiene dueños conocidos, ya que no hay registro legal de su propiedad.

- Hay 1.2 millones de familias de "posseiros", campesinos que ocupan tradicionalmente un pedazo de tierra y que tienen derecho a su propiedad, pero no poseen títulos que les aseguren su ocupación legal.

- Hay nueve millones de trabajadores rurales indocumentados.

- Hay 54.781 grandes propiedades rurales improductivas en el país, sumando más de 120 millones de hectáreas y 23 millones de campesinos viviendo en la pobreza porque no disponen de ninguna tierra para cultivar.

- El agronegocio representa hoy un tercio del producto bruto interno brasileño y por 44 por ciento de las exportaciones.

Por último, unas breves notas sobre el programa Hambre Cero. Este programa sigue dando

sus pasos, en 2003 llegaron a más de 3 millones de familias y prepararon a más de 500 educadores que están implantando la pedagogía de Paulo Freire. Ese programa sigue defendiendo su carácter no asistencial y sí de inserción social. Sus impulsores saben que combatir el hambre no es sólo donar comida a los pobres y, por eso, fomentan entre los núcleos familiares el cooperativismo, los microcréditos, la educación ciudadana y cómo no defienden la necesidad de la Reforma agraria sin la cual este programa estaría condenado al fracaso. Fray Betto, uno de los máximos responsables de este Programa ponía como ejemplo del talante con que se trabaja en Hambre Cero el hecho de que cuando se le da una tarjeta ciudadana a una familia y va al banco federal a sacar dinero se le pone como condición que ninguno de sus miembros sea analfabeto, y si alguno lo fuera, ha de justificar que ha empezado su proceso de alfabetización.

Concluyendo

Se podrían seguir apuntando otros muchos aspectos del caminar brasileño durante el gobierno de Lula que omito para no extender más este artículo. Hace ya un año largo me preguntaba con motivo de la llegada de Lula al poder por cómo se podía ser revolucionario en lo social siendo conservador en lo económico. Las cosas no casaban entonces y siguen sin casar hoy. El neoliberalismo no es sólo una doctrina económica, arrastra tras de sí toda una dinámica que hace que el resto de ámbitos de la vida política y social se pongan en coherencia con esa dinámica económica inicial.

Por eso, el camino de Lula se estrecha poco a poco entre dos realidades en conflicto: los intereses del pueblo y los de la dinámica neoliberal de obtención de lucro a cualquier precio. No va a tener nada fácil el Gobierno brasileño avanzar, porque hasta ahora el que más ha puesto ha sido el pueblo, pero el pueblo tiene que comer y vivir más dignamente, y eso no lo da sólo la esperanza. Lo da la esperanza y las leyes, la esperanza y la defensa de sus derechos, lo da la esperanza y la participación activa en la toma de decisiones sobre su futuro.

Si al pueblo hay que pedirle un esfuerzo más, al FMI, al BID y a los grandes terratenientes hay que pedirles diez veces más, o es que, tal vez, no se está en condiciones de hacerlo. Entonces, hay que ponerse a buscar apoyos para que eso sea una realidad y, si no se está en condiciones de conse-

guirlo, hay que decirlo para no retardar ni un momento más la organización de una nueva alternativa.

Siempre se es inflexible con el cumplimiento de los programas económicos y nunca con los sociales y, al final, los mandatarios siempre acababan con el pueblo enfrente y no a su lado, salvo en contadas ocasiones. Sería triste que Brasil, con Lula como presidente, acabara siendo un ejemplo más.

Cuando uno entra en la política institucional y alcanza el poder ya no puede vivir sólo de discursos de oposición, hay que hacer política concreta y cumplir con lo prometido, con aquello por lo que los ciudadanos le han dado a uno su voto.; es el momento en que el posibilismo muestra su rostro más tentador; el momento en que los populismos empiezan a perder sus maquillajes electorales; el momento en que los hechos se imponen a los deseos sacando la demagogia a flote; el momento en que uno descubre en buena medida quiénes son verdaderos compañeros de viaje, etc. Es líneas generales un momento difícil visto desde la perspectiva de la coherencia, ya que el proyecto político que se defiende se pone ante el espejo de la realidad, con sus fortalezas y debilidades, y es cuando hay que optar por el pueblo o por la “cosmética política”.

Si en Brasil se llegara a imponer la “cosmética política” el neoliberalismo habría ganado otra batalla más y la desesperanza avanzaría otro trecho en el corazón de no pocos. Más aún cuando esto fuera así, no faltarán las gentes luchadoras y honestas que seguirán trabajando y que en el fondo son las que hacen que un proyecto político que aspira a acabar con el hambre en un país como Brasil tenga éxito. Porque señores del Gobierno brasileño, no nos engañemos, aunque tuvieran recursos económicos suficientes, si no se tiene una militancia comprometida a favor de los últimos no se acaba con el hambre ni en Brasil, ni en EE.UU., y si no que se lo pregunten a las decenas de millones de pobres que malviven en el país más poderoso, económica y militarmente hablando, del mundo actual.

Siendo lo económico muy importante, avivar y acrecentar esa militancia de base es vital para Brasil, sin ella no sólo están condenadas al fracaso las transformaciones sociales y las reformas institucionales, es que, el motor de la justicia social en Brasil estaría gravemente dañado. Es por eso que Lula ha de dar oxígeno, poner los recursos

adecuados e impulsar la consolidación de esa militancia, y hacerlo sin instrumentalizarla y sin reducirla al campo de lo social, ¿cuándo asistiremos a la promoción de una militancia económica que sea eficaz y a la vez alternativa a la economía neoliberal al uso?.

Es cierto que una militancia de base, activa, organizada y bien formada puede ser percibida por los gobiernos como un potencial enemigo ya que podría fácilmente dañar su imagen ante los posibles “deslices políticos”, e incluso someterlo a un stress reivindicativo del cual no sería fácil salir. Mas ese “riesgo” se atenúa cuando a esa militancia no se la aparca en los arrabales de la gestión de la vida pública. En este sentido Lula ha de revisar seriamente los pasos dados hasta ahora si quiere llegar a buen puerto por dos razones: la primera, porque su capacidad transformadora no reside hoy por hoy ni en su equipo económico, ni en buena parte de los responsables de gobierno determinados por las necesarias políticas de búsquedas de apoyos; la segunda, porque si su proyecto político fracasa ha de dejar tras de sí un camino más llano y no más abrupto para los que vienen detrás buscando un Brasil más justo, más equitativo.

Asumir ese “riesgo” de apoyar y reforzar a todo ese mundo de las militancias de base, ya de por sí ricas en Brasil, reforzaría la base social del Gobierno, le llevaría a buscar caminos de mayor coherencia, daría un vuelco al orden de ciertas prioridades fijadas hasta ahora por el gobierno y sería una buena forma de poner distancia con una afirmación difícil de rebatir hoy por hoy para el Gobierno de Lula: la de aquellos que preguntándose por quién manda hoy en Brasil llegan a la conclusión de que mandan los de siempre, con un matiz, la izquierda pone la imagen y los conservadores hacen la política.

JOAQUÍN GARCÍA